



VIOLENCIA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y AYOTZINAPA

Sergio Tamayo¹

Hay tres ámbitos de la realidad social que hoy por hoy están interconectados estrechamente: la violencia institucional, la violencia en los movimientos, y las respuestas de los movimientos a la violencia institucional. Reflexionar sobre estas dimensiones de la dinámica social es el objetivo de este trabajo.

La violencia institucional

Gramsci señala que la hegemonía política se alcanza a través de una estrategia que combina consenso y coerción. El consenso es resultado de la inserción en la ciudadanía de una cultura política de legitimación de la acción de autoridad, del reconocimiento de la diferencia y la estabilidad del estado de cosas vigente. La coerción, al contrario, es la aplicación de lo que Weber mostró como resultado del monopolio de la violencia legítima en casos en que la cultura no haya sido capaz de mantener la estabilidad política. La violencia se ha configurado, como señala Roberto Bergalli (2009), desde la función de gobierno, en un rasgo característico

¹ Profesor-investigador del Área de Teoría y Análisis de la Política, Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco. Blog: www.sergiotamayo.wordpress.com

de poder. Cuando el poder se deslegitima, continúa Bergalli, la violencia puede adquirir formas tanto decontroladas en su ejercicio, como exacerbadas en sus aplicación: “De aquí a la aparición del terror hay generalmente poca distancia y la violencia, entonces, puede perder toda medida y previsión, dando lugar a los conocidos “terrorismos de Estado” (Bergalli, 2009:IX).

Por su parte, Ruggiero (2009) define la violencia política como esa fuerza que proviene del ejercicio “desde arriba” o “desde abajo”. Desde arriba como violencia institucional, que está presente como una forma extrema de conservación, “cuando lo que se pretende es proteger la estabilidad del sistema y reforzar la autoridad constituida” (Ruggiero, 2009:1). La violencia “desde abajo” es “anti-institucional, una fuerza ilegal dirigida contra la autoridad” (Ruggiero, 2009:2).

Estas formas de violencia a menudo se combinan entre sí, pero pocas veces se analizan en su intrincada relación. Ruggiero reconoce el hecho de que los estudios sociológicos más exhaustivos, insertos en el campo de la criminología, son análisis de procesos estructurales explicatorios de la evolución de los homicidios y otra tipología del crimen. No obstante, en estos estudios se ha excluido del análisis a la violencia política. “Quien protesta –dice Ruggiero (2009)- en el fondo usa a veces medios ilícitos, se enfrenta a la legitimidad del sistema contra el que lucha”. La protesta puede llegar a ser amenazante de la estabilidad del sistema, y contra ella se dirige la violencia institucional.

En esta reflexión sobre el tema de violencia y movimientos sociales, es imposible no referirse a dos situaciones que ahora nos atañen directamente: en primer lugar la conveniencia de pensar la relación entre corrupción y violencia en el debilitamiento del Estado, y temas adyacentes sobre su impacto en la vida cotidiana, la configuración de empresas transnacionales, el ejercicio de los derechos humanos, la política y economía nacionales.² En segundo lugar, debido a su importancia e impacto social, el caso de los jóvenes muertos y 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, así como el movimiento social que ha surgido por la presentación de los jóvenes y la demanda de renuncia del presidente de la República.

El caso Ayotzinapa revaloriza algunos de los preceptos planteados por Ruggiero y Bergalli. En primer lugar, toca aspectos de violencia institucional, promovida como política de Estado contra el crimen organizado, conocida como “Guerra contra el crimen organizado” e impulsada desde la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y continuada en la presidencia de Enrique Peña Nieto. En segundo lugar, la estrecha vinculación de esta política de agresión con los movimientos sociales existentes a través de la criminalización sistemática de la protesta social.

Ayotzinapa es un caso dramático de una posible ruptura de la hegemonía y el vínculo mando-obediencia, del desmoronamiento de la gobernabilidad, y del equilibrio en la relación entre el Estado y la ciudadanía (Camou, 2001). Por eso es

² Una versión preliminar de este trabajo se presentó en el Tercer coloquio sobre Ética y capitalismo, organizado por el Área de Estado, Gobierno y políticas públicas y la revista REDPOL, que abordó estos temas, organizado del 29 de junio al 3 de julio de 2015, en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.

tan delicado su tratamiento. Por un lado, no es la primera vez, desde la masacre del 2 de octubre de 1968, hace casi medio siglo, que el Estado aplica con extrema severidad la tecnología más sanguinaria de la represión contra los movimientos sociales (González Villarreal, 2012). Tenemos el ejemplo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, y además el crimen de Aguas Blancas en 1995 y la masacre de Acteal en 1997. Algunos analistas habían confiado que tanto la resonancia social y cultural del movimiento estudiantil sobre la sociedad durante las siguientes décadas, como la transición a la democracia de 1989 a 2000, cerrarían para siempre como opción una política represiva de tal naturaleza (Salazar, 2001). No fue así.

Por otro lado, es la primera vez que de manera tan evidente, el narco-poder arremete con tal ferocidad contra los movimientos sociales. Durante la década pasada, la primera del siglo XXI, han surgido protestas y movimientos contra la violencia y la inseguridad de diversos sectores de la ciudadanía. Han sido respuestas ante los llamados daños colaterales y la resultante criminalización de la protesta por parte del gobierno. Sin embargo no habíamos presenciado una masacre de tal magnitud dirigida a un blanco tan específico, donde se haya vinculado con tal claridad al Estado con el crimen organizado (*cfr.* Fazio, 2013).

Aunque en contadas excepciones los movimientos sociales no habían producido en este contexto, como dice Ruggiero, un marco diagnóstico convincente (*cfr.* Véase la definición de enmarcado en Hunt, Benford, Snow, 2006), que atribuya con certeza la responsabilidad de la violencia a esta

complicidad entre las mafias del narcotráfico y las mafias del poder político, en sus distintos niveles (municipal, estatal y federal). Por eso también, el caso Ayotzinapa se puso a la cabeza de la exigencia ciudadana, debido a la construcción de un discurso por parte del movimiento que supo en su momento interpelar a la gran mayoría de la ciudadanía. Christian Bachmann y Nicole Le Guennec (2002 [1996]) en su libro “Violencias Urbanas”, destacan como parte de una tipología detallada de la violencia, a la violencia institucional degenerada por la impunidad y la corrupción. Sin embargo, mi hipótesis es que después de tres meses de intensas movilizaciones por Ayotzinapa (de septiembre-diciembre de 2014), el movimiento declinó en participación, debido a varias razones, entre ellas que el discurso hegemónico del movimiento no pudo interpelar a la ciudadanía a favor de una lucha contra la corrupción, la impunidad, y la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad, sintetizada en la famosa consigna “FUE EL ESTADO”, que prendió espontáneamente en la megamarcha de noviembre de 2014.

En México, la inserción de los cárteles y los múltiples tentáculos de grupúsculos delincuenciales derivados de escisiones y alianzas criminales entre los grandes capos y el gobierno, les ha permitido controlar la geografía del país. Se han apoderado de los puestos de mando de toda la jerarquía política, en los gobiernos municipales, en las gubernaturas y en la federación, sin importar ideología ni partido político. La explicación de tal situación se ha centrado en la criminalización de los delitos, como en el caso de las muertas de Juárez, los feminicidios, pero sin asociarlas cabalmente con la violencia política e institucional.

Por eso algunas feministas plantean con toda razón el hecho de que con el feminicidio, las muertas somos más que 43, y la explicación recae en la misma causa: es el Estado.³

Con todo, esta situación habría producido dos tipos de respuestas de la ciudadanía: una primera, reactiva y lógica de las víctimas, que se expresa como un gran esfuerzo individual, impotente y desarticulado, contra un imaginario de Estado omnipresente que debería asumirse como garante de la seguridad de los ciudadanos, pero que no lo es. Otra respuesta que podemos definir como más política, tiene diversas vertientes anidadas en ciertos formadores de opinión y los principales movimientos del país, como el EZLN y la Otra Campaña, MORENA, y Sindicatos semiautónomos (UNT y SME), pero sin ninguna contundencia ni arraigamiento en la población. Pocos responden a las convocatorias de estas organizaciones.

Xavier Crettiez en un libro que coordinó con Laurent Muchielli (2010) titulado *Las violencias políticas en Europa*, plantea la importancia de pensar la violencia política y su relación con los movimientos sociales a través de factores estructurales, e institucionales, tanto como culturales e históricos. La economía, las crisis, la demografía y los cambios en la constitución de los mercados laborales, así como las reformas estructurales, como las que hemos constatado en México desde el comienzo del siglo XXI, pueden explicar una situación de violencia en el país y de las formas de resistencia de la sociedad civil a sus

³ El tema se tocó en el Seminario Café Debate de Cultura Política, versión primavera, con el título "Contra la naturalización de la violencia de género. Un enfoque político", del Área de Teoría y Análisis de la Política, Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, en 2015.

perniciosos impactos. Asimismo, es importante incorporar al análisis aquellos aspectos institucionales que configuran lo que McAdam y Tarrow han definido como Estructura de Oportunidad Política. Lo he planteado en un trabajo sobre ciclos de protesta, atribución a la estructura de oportunidad y definición de repertorios de la movilización para explicar la dinámica política en México en el siglo XXI.

Especialmente en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, se constituyó una demanda que aunque entonces no pudo articularse enérgicamente con los movimientos sociales, estuvo orientada contra la criminalización de la protesta que se produjo como resultado de las políticas erráticas del entonces presidente. Esta criminalización significó a manera de la guerra sucia de los setenta, reprimir de manera selectiva a los activistas sociales, desaparecerlos, torturarlos y asesinarlos. Esta práctica nunca desapareció desde la época del presidente Echeverría (1970-1976), se reprodujo incluso contra el PRD de Cárdenas en el sexenio de Salinas (1988-1994), y después, todo el aparato de estado, hasta los propios neo-perredistas, la ha venido aplicando con eficiencia aterradora en las comunidades. Con los llamados "levantones" (que son secuestros flagrantes por el crimen organizado) desaparecen a activistas y dirigentes, responsabilizando al narco de lo que en realidad es una violencia selectiva del Estado. 27,200 muertes por homicidio sólo en 2011. Entre 2006 y 2012, sólo en la administración de Calderón, se estiman 121,683 muertes violentas según INEGI. La prensa informó que en los primeros 20 meses del sexenio de Peña Nieto, hasta agosto de 2014, se registraron 57,899 homicidios

dolosos, un promedio de 50 asesinatos diarios.⁴ Además, el descubrimiento de decenas de fosas clandestinas con decenas de muertos por delincuentes, policías y ejército implicados, aumentan alarmantemente estas cifras. Procesos sociales como inmigración, feminicidios, criminalización de la protesta y narcotráfico están involucrados. Pero también, procesos políticos y judiciales como corrupción e impunidad son la base de explicación de la atmósfera terrorífica de la violencia en México.

El narco y la violencia criminal han invadido, además de la economía, a los poderes de la nación, profundizando lo que Lorenzo Meyer (2013) ha precisado como democracia autoritaria. El crimen organizado ya no sólo es un poder paralelo como Sergio Aguayo (2014) insiste en definirlo. Lo era en la transición de los ochenta y noventa, pero ya no. El crimen organizado está hoy mimetizado con el Estado. Compra jueces y hay narcojueces, compra diputados y hay narcodiputados, compra funcionarios y hay narcofuncionarios. Ha contaminado al conjunto del sistema político, e incluso se ha infiltrado en el propio sistema de partidos institucionalizado. Ha invadido y corrompido el sistema autónomo electoral, el IFE (Instituto Federal Electoral) antes y el INE (Instituto Nacional Electoral) ahora, e interviene y controla la organización y ejecución de las elecciones tanto federales como locales (cf. Hernández, 2010). Así se explica que en estas elecciones de 2015 haya habido nada menos que 21 políticos asesinados, seguramente metidos en luchas por el poder con el narcotráfico,

⁴ Véase a Sandra Ley. "El desafío de contar a nuestros muertos". En <http://movimientoporlapaz.mx/es/2012/09/14/el-desafio-de-contar-a-nuestros-muertos/> Última consulta: 6 de abril de 2015 y Diario Zeta de Tijuana <http://zetatijuana.com/noticias/reportaje/16223/el-presidente-de-las-83-mil-ejecuciones> última consulta 6 de abril de 2015.

desde precandidatos, candidatos, coordinadores de campaña, funcionarios y militantes.⁵

El narco ha taladrado las empresas públicas y privadas de los medios de comunicación (Fazio, 2013). Recordemos esa expresión que se ha hecho popular que dice: "antes (el narco) le pagaba al diputado para favorecerse, ahora es él mismo, el diputado". La sociedad no está ajena a esta situación, y puede confrontarse si hay condiciones políticas para hacerlo. La situación se complejiza cuando se observa que en algunos lugares del país el narcotráfico es apoyado y venerado, como en el estado de Sinaloa, a diferencia de otros lugares donde la presión para obtener esa especie de “impuesto de piso” ha puesto al narco contra la misma sociedad.

Violencia y movimientos

Quisiera plantear aquí el segundo aspecto de este ensayo, vinculando violencia y movimientos.

Ayotzinapa generó un importante movimiento naciente, que aunque ha mostrado recientemente ciertas señales de desmovilización, puede despuntar contra el autoritarismo y la violencia de Estado en dos vertientes (Cf. González Villarreal, 2015). La primera está basada en el rechazo inicial y casi unánime de la ciudadanía contra el despotismo y la impunidad del Estado mexicano que ha significado su liga con el narcotráfico. Una enorme mayoría de mexicanos coincide con la interpretación de los hechos y el burdo comportamiento de las instituciones

⁵ Véase el reportaje de David Vicenteño de Excélsior, en <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/04/1027625>, última consulta 15 de junio de 2015.

de procuración de justicia. La sociedad de acuerdo a algunas encuestas de opinión responsabiliza al Estado en esta violación flagrante de los derechos humanos, y su intrincada asociación con los criminales. La segunda es la participación activa de esa ciudadanía plural. En la articulación de un discurso sobre el diagnóstico y las formas de acción está el dilema.

Como al inicio del movimiento #Yosoy132, las universidades privadas y otras que usualmente no se movilizan en protestas de este tipo, se sumaron en un acto plausible por el significado que tiene la solidaridad de clase entre uno de los grupos que representan instituciones de élite en el país, con uno de los grupos estudiantiles más pobres del país: se han movilizado la IBERO, el TEC (ITESM), la U. Del Valle, el ITAM, el Claustro de Sor Juana, el ITESO, así como El COLMEX, FLACSO, y CIDE, entre muchas otras; asimismo, muchos grupos de jóvenes en más de 100 ciudades en el extranjero y decenas de ciudades en el país han venido realizando actividades por la presentación de los 43 estudiantes. Las manifestaciones han incorporado alrededor de 100 escuelas y ciudadanos. Junto a ellos, otras organizaciones sociales vinculadas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), asociaciones de la sociedad civil, sindicatos, académicos, organizaciones urbano-populares, feministas y del movimiento LGBTTTTI se han venido sumando a las movilizaciones.

Cuando un movimiento antisistémico empieza a esbozarse, desde el interior de la ciudadanía, el Estado activa un engranaje de contención. Parte de la violencia política institucional, como vimos con Bergalli, es la estrategia del Estado para diseñar lo que Roberto González Villarreal ha denominado con acierto una

tecnología represiva integral (González Villarreal, 2012) que con el tiempo ha perfeccionado con mayor sofisticación. Esta tecnología la aplica contra los movimientos sociales, definidos como posibles fuentes de subversión.

Penetrados estos dispositivos represivos principalmente en el ejército y sistemas de inteligencia nacionales, desde los mandos militares y de inteligencia estadounidenses para América Latina, son una técnica contra la subversión y el terrorismo, términos estos que han funcionado muy bien como eufemismos para calificar a los movimientos sociales y criminalizar la protesta (D’Odorico, 2011). Pero ahora, como hemos visto el Estado ha incorporado la violencia de los grupos criminales organizados a sus estrategias encubiertas. El motivo, además de decapitar el activismo, es propagar el miedo en la sociedad, aplastar de antemano cualquier intento de rebeldía y mantenerla en sometimiento simbólico. El miedo, en efecto, es un sentimiento intenso que experimentan individuos y movimientos. En la teoría de las emociones en los movimientos sociales (Goodwin, Jasper y Polleta, 2007; Jasper, 2008), el miedo puede hacer prender la mecha de la indignación y la rebeldía, como sucede en los movimientos nacientes. Eso pasó en el movimiento estudiantil de 1968; pasó también en las grandes movilizaciones de la sociedad civil por la paz contra la violencia del Estado ante el surgimiento del EZLN en Chiapas en 1994; pasó ahora con el movimiento por la presentación en vida de los normalistas de Ayotzinapa. Pero también, el miedo puede convertirse en terror, como lo dice Ruggiero con la intención de la violencia política institucional. El terror es una emoción fatídica que se interioriza con el peso lacerante de la tecnología de la violencia, ante el riesgo de la muerte, y entonces

puede generar en contraparte la desmovilización (Fillieule, 2013; Olivier, Tamayo y Voegtli, 2013).

El Estado, en sus respuestas -y de acuerdo a la definición que hace Bergalli, como monopolio de la violencia institucional- no improvisa con respecto a la protesta social, ya que va en riesgo la estabilidad del sistema y el poder político. José C. D'Odorico, un militar retirado de la Fuerza Aérea Argentina, especializado en el estudio de la guerra revolucionaria marxista-leninista y la guerra subversiva, es autor de 3 libros y más de 350 artículos profesionales sobre este tema, así como asesor de la Escuela Superior de Guerra Aérea de Argentina. La preocupación de la autoridad que podemos deducir sobre los movimientos sociales, asumida por D'Odorico, es el estado de radicalización de la protesta hacia formas de subversión no convencionales. El análisis de los conflictos se basa en una disección detallada de la formación de grupos y movimientos revolucionarios que puedan impactar el orden social. Así, los movimientos sociales, según este autor, son impulsados por grupos que no son autónomos, siempre son parte de "algo más grande... y ese algo aún indefinido puede ser un gran problema nacional... pueden enmascarar un próximo levantamiento popular, encubrir intenciones políticas anti-gubernamentales, servir a ideologías extremistas y, por que no, oficiar de cuerpo mercenario de defensa de una corporación delictiva" (D'Odorico, 2011:77). Entre los fundamentalistas, continúa D'Odorico, los movimientos subversivos tienen más éxito con los individuos de espíritu sensible, amantes de las artes o de ideas reaccionarias, siempre inclinados a enamorarse de lo opuesto. Y los que llegan a ser capturados aspiran

a ser tratados como “prisioneros de guerra”. Pero en un lenguaje más civil, podríamos equiparar esta expresión con la de “presos políticos” o “presos de conciencia”.

¿Cómo romper la unidad de un movimiento? Esta es la pregunta que se convierte en la finalidad de la acción de toda violencia institucional. Dice D’Odorico: los movimientos se expanden por la falta de energía institucional, lo que genera un clima positivo para el desarrollo de lo que define como “esa plaga”. El Estado debe entonces abrir una brecha entre la población y las fuerzas del orden para que en un futuro los activistas automáticamente queden en tela de juicio ante la sociedad. Introducir la fractura en los movimientos a través de confrontarlos en distintas estrategias los evidencia, y eso les genera un claro rechazo popular.

Cuando los movimientos desarrollan una efectiva persuasión a la población, como está pasando en el caso de Ayotzinapa, el Estado comienza a endurecer su discurso y sus acciones. El presidente Peña Nieto se vio obligado a pronunciarse con respecto a actos de violencia que con seguridad fueron incitados desde las propias corporaciones policiacas, con la finalidad de ir justificando la paulatina dureza de las respuestas y legitimar actos de violencia contra el movimiento para desmovilizarlo. “Si las fuerzas legales -señala D’Odorico- no replican con energía, las guerrillas (o los movimientos) se hacen más osadas.” Si la presión introduce una cuña entre el gobierno y la ciudadanía, los movimientos se autoasignan un papel protector de la comunidad y desplaza las funciones del Estado legítimo. La violencia institucional tiene que romper el vínculo entre movimiento y sociedad.

Los desafíos

En este apartado abordo los desafíos que enfrentan los movimientos ante la realidad desbordante de la violencia institucional.

El problema para la ciudadanía indignada, harta de las formas de control social del gobierno, estriba en las diversas concepciones que saltan en el debate sobre qué hacer. Las instituciones de Estado exasperan por estos hechos abominables, pero algunos ciudadanos, aunque indignados, tratan de encontrar otros medios de movilización no violentos y menos radicales, que no sea el paro o la toma de instituciones, la quema de vehículos o edificios, el enfrentamiento directo con la policía, e incluso persuadir a estudiantes y otros sectores a volver a la normalidad. ¿Qué hacer? se vuelve la pregunta decisiva.

Ante un movimiento diverso en su composición, variado en sus ideologías y valores, y particular en sus intereses, la toma de decisiones se convierte en un desafío ¿Qué hacer pues ante tal pluralidad? La pluralidad es una categoría positiva de diversidad, pero puede ser complicada para la acción colectiva, si no se encuentran los mecanismos de alineamiento adecuados entre esa gran variedad de grupos ciudadanos indignados. En general, los movimientos sociales han dirigido sus esfuerzos hacia un cambio social, pero han minimizado el cambio político (Tilly, 2008; Tamayo, 1999). La paradoja es elegir entre la transformación estructural del sistema capitalista, o el cambio político dentro de la estructura. Touraine (2013) le apuesta a una posición postsocial, con un mayor contenido

ético que económico. Para mí el dilema es asegurar el paso de lo social a lo político, en un trayecto pincelado con una cultura democrática desde abajo.

En estas paradojas se encuentra una de las contradicciones del #yosoy132 entre los estudiantes de privadas que condujeron el movimiento en los primeros 45 días del mes de mayo y junio de 2012, y los estudiantes de escuelas públicas que lo condujeron los siguientes 120 días, fue precisamente definir entre objetivos políticos ligados a la elección presidencial del 1 de julio, u objetivos sociales vinculados a las luchas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ATENCO y los maestros. Creo que esta fue una contradicción irresoluble que pudo ser una de las causas de la desmovilización (Olivier y Tamayo, 2015).

Así, el desafío teórico y empírico de los movimientos sociales y la manera de articular lo social y lo político, y contrarrestar los influjos negativos de la pluralidad, significa que una lucha particularista debe convertirse en un proyecto con carácter universal, que sea capaz de ir abarcando las expectativas y utopías de una gran mayoría de ciudadanos (véase sobre esta contradicción a Laclau, 2003).

Ayotzinapa está siendo un parte-aguas en los movimientos sociales del siglo XXI mexicano, ante un momento histórico de gran indefensión de la sociedad. Dependerá de la manera cómo el movimiento logre producir un discurso articulador del sentimiento de indignación de las y los mexicanos, en torno a la desaparición forzada de esos jóvenes que representan ni más ni menos que los hijos de la nación; con un argumento creíble sobre el mérito de su lucha contra el

Estado; con un repertorio de movilización que haga cambiar la correlación de las fuerzas políticas en el país e impacte decisivamente el régimen político (Tilly, 2006).

En tal sentido, el dilema del movimiento es la construcción de un discurso que alinee las distintas fuerzas que podrían impulsar un movimiento ciudadano sin banderas ideológicas que las particularice. Me refiero a la amplia participación de los estudiantes en primer lugar, y de las asociaciones civiles de derechos humanos; pero después a formas de articulación en red con otras fuerzas como el EZLN y la SEXTA, MORENA, la Organización del Pueblo y los Trabajadores (OPT), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), etcétera; en un movimiento extendido que pueda erigirse en un movimiento antisistémico, contra el sistema de partidos, el Sistema Judicial y el Poder Ejecutivo.

Hasta ahora, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y el movimiento social en torno a los padres de los 43 desaparecidos han construido un amplio repertorio de movilización: toma de camiones, plantones, actos de oración y ayuno, toma de oficinas públicas, destrucción (incendio) de inmuebles; el 8 de octubre de 2014 organizaron la primera jornada de acción nacional e internacional por Ayotzinapa; el 16 de octubre de ese año realizaron el primer paro de 30 escuelas por 48 horas: UNAM, UPN, UAM, Chapingo, Morelos, Veracruz; el 22 de octubre, planearon el Día de Acción Global por Ayotzinapa (2a. marcha multitudinaria en la cd. México); el 25 de octubre, 80 escuelas en Asamblea Interuniversitaria convocaron a la 2a. Jornada de Acción Global e Internacional

con el paro de 72 horas. para el 5 de noviembre, dentro del cual ciudadanos tomaron el Congreso Local de Sonora; además se han realizado bloqueos de autopistas; toma de medios; toma de casetas de cobro; los padres de los desaparecidos han tenido pláticas con EPN y el Procurador General de la República (PGR) y encuentros con el Ejército; se han efectuado marchas en ciudades medias: como Acapulco, Chilpancingo, e Iguala, y en muchos estados del país; la caminata de 191 kilómetros a la ciudad de México; se han impulsado recorridos de los padres de los desaparecidos por varias ciudades del país y en ciudades de los Estados Unidos y Europa; la mega marcha del 20 de noviembre que salió de tres puntos de la ciudad; y la organización del Paro Nacional para el mes de diciembre, y vínculos con asociaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre muchas otras actividades espontáneas de la ciudadanía.

Los repertorios de movilización son importantes porque se convierten en un puente de entendimiento con la sociedad. Constituyen la continuidad e innovación de la experiencia histórica de la sociedad en acción.

Pero el Estado, como vimos con la reflexión sobre la perspectiva de D’Odorico, hace lo imposible por romper la articulación del movimiento con la sociedad. Buscará cortar de tajo la comunicación con la población interviniendo, infiltrando, provocando la violencia (Olivier, Tamayo, Voegtli, 2013). El desafío de los movimientos es evitar que eso pase, para que la fuerza de hoy no se vuelva mañana desmovilización. El manejo de las emociones en este tipo de protesta es en efecto un desafío más para los movimientos sociales, porque la respuesta tanto de los grupos radicalizados que consideran la violencia como una herramienta de

provocación para la espontánea insurrección de las multitudes, como la violencia del Estado provocada por grupos de infiltrados que buscan la justificación para una intervención legítima de la fuerza pública, socavan el movimiento. Así pasó en el movimiento estudiantil de 1968, en Atenco y en la APPO. Y así está pasando con Ayotzinapa, con la llamada acción directa de grupos anarquistas en el DF que se confundían con la infiltración del Estado provocando ellos mismos ese tipo de acciones para justificar la intervención policiaca. La articulación entre discurso y formas de acción como hemos dicho se convierte así en el reto más importante de los movimientos, en el objetivo de influir a un mayor número de audiencias.

El caso de las elecciones intermedias de 2015, que en el estado de Guerrero se elegía además al gobernador, es ejemplar en este caso. El debate nacional entre votar por partidos institucionalizados, abstenerse de emitir el sufragio, efectuar el voto nulo, o realizar el boicot a las elecciones, dividió al movimiento, aceleró la desmovilización y generó, al menos en Guerrero, una respuesta contraria a lo previsto: el triunfo del PRI en la gubernatura del Estado. Los resultados de una encuesta propia sobre la simpatía del voto realizada por el entonces candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, le definieron el lema de campaña: orden y paz, con el cual ganó la elección. Los guerrerenses estaban en contra del crimen y la corrupción, pero estaban cansados de las movilizaciones de las organizaciones sociales guerrerenses y de la coordinadora de maestros que por tanto tiempo irrumpieron con acciones de violencia la vida cotidiana de las y los ciudadanos. El problema para mí fue la dificultad de armar un discurso que se alineara adecuadamente a los imaginarios de las y los ciudadanos, en

concordancia con un repertorio de movilización basado en la resistencia civil pacífica. Esa alineación no se pudo dar en Guerrero, ni Michoacán, ni Oaxaca, ni Chiapas, y los resultados mostraron otra interpretación de la ciudadanía sobre el conflicto. El miedo que produce indignación, se convierte en miedo que produce terror, y esa emoción desmoviliza.

Adolfo Gilly y Boaventura de Sousa, publicaron en noviembre y diciembre de 2014 sendos comunicados coincidiendo en la preocupación de que el movimiento pudiese caer en la provocación de la violencia que proviene de grupos radicalizados y se pudiera confundir con la violencia encubierta que el Estado promueve a través de infiltrados y de la represión abierta de los cuerpos policiales.

En el movimiento por la presentación de Ayotzinapa y por la renuncia de Peña Nieto, no había habido violencia. Ha habido, como señala Gilly, rabia, indignación y coraje. En las primeras manifestaciones públicas de gran participación multitudinaria, se había concurrido en un ambiente de amplia y emotiva solidaridad, de adhesión de todas y todos al dolor de los familiares de los estudiantes desaparecidos, de respaldo a una causa que se había asumido como propia, en un entorno de confianza y compañerismo con el otro desconocido que sin embargo se vuelve entrañable, porque camina codo a codo contigo y con los demás.

No obstante, la violencia se desató, a veces por “pequeños grupos de encapuchados -como lo señala Adolfo Gilly⁶:

“que creen su deber y su derecho apoderarse de una manifestación ajena y convertirla en un aquelarre violento y sangriento, (que repiten) una vez más, engrandecido, el esquema del primero de diciembre de 2012. Sus argumentos más extremos se expresan en lenguaje y en propuestas paramilitares... En Génova, París, Madrid, México o Seattle tales encapuchados aparecen y provocan el desencadenamiento de la represión sobre quienes marchan a cara descubierta proclamando la solidez de sus motivos y la claridad de sus propósitos. Este proceder no es nuevo y ha sido denunciado y puesto en evidencia en muchas partes del mundo... El gobierno federal y el del Distrito Federal conocen bien la repetida mecánica de estas provocaciones”.

En efecto, estas provocaciones se usan y reproducen por la autoridad para socavar la fuerza del movimiento.

Boaventura de Sousa Santos, publicó el pasado 16 de noviembre en La Jornada, una “Carta a las y los jóvenes de México”.⁷ Quisiera citar aquí algunas reflexiones que me parecen muy pertinentes con respecto al tema que nos ocupa:

“Hay varias opciones –dice de Sousa- y no me sorprende que Ustedes (con mayúscula) las contemplen todas. Sé que algunos buscan

⁶ Véase Adolfo Gilly “Dos meses después: ¡Vivos los queremos!” en La Jornada, 24 de noviembre de 2014.

⁷ Véase Boaventura de Sousa Santos “Carta a las y los jóvenes de México” en La Jornada, 16 de noviembre de 2014.

criar zonas autónomas, libres de opresión y de dominación. Tales zonas liberadas son fundamentales como espacio de educación, para que Ustedes muestren unos a los otros que es posible vivir de manera cooperativa y solidaria; para que cada uno y cada una pueda decir: yo soy porque tú eres. Pero más allá de las zonas liberadas es necesario enfrentar el poder político, económico y cultural que oprime y aterroriza. Para eso hay dos opciones básicas y estoy seguro que Ustedes analizan las dos con mucho cuidado: por un lado, la lucha armada, por otro, la lucha pacífica, legal e ilegal. Si me permiten, les digo que la historia muestra que la primera es irrenunciable solamente cuando no hay otra posible alternativa. La razón es simple: la lucha armada difícilmente tiene respaldo popular si obliga a sacrificar la vida para defender la vida. La pregunta es ¿hay espacio de maniobra para una alternativa pacífica? Humildemente pienso que sí –señala Boaventura- porque la democracia mexicana, a pesar de estar muy herida y violada, está en nuestro corazón, como bien demuestran sus luchas contra tantos y sucesivos fraudes electorales. Miren la experiencia del sur de Europa, donde el desespero de los jóvenes está dando lugar a innovaciones políticas interesantes, partidos-movimientos que asumen internamente los procesos de democracia participativa, donde los rostros conocidos son voceros de procesos de deliberación muy creativos en que participan miles de ciudadanos y ciudadanas. Y subrayo, ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, en muchos países, y México no es excepción, las tradiciones de lucha tienen estilos bastante autoritarios, estilos machistas verticales. Hay que profundizar a ese nivel la

democracia participativa, sobre todo cuando sabemos que las mujeres han sido tantas veces blancos privilegiados de los sicarios. ¿Será posible en México un nuevo partido-movimiento organizado por las jóvenes y los jóvenes? Ustedes saben la respuesta. Mejor aún, Ustedes son la respuesta. No va ser fácil porque los señores del poder van intentar criminalizar su lucha pacífica. Hay que asumir el costo de la resistencia pacífica aunque ésta sea declarada ilegal, asumir ese riesgo en nombre de la esperanza. El miedo de la ilegalidad tiene que ser enfrentado con la convicción de la ilegalidad del miedo. Ahí está la esperanza”.

Consideraciones finales

Quisiera concluir este ensayo sobre violencia y movimientos sociales con una reflexión. La respuesta que debe surgir de los movimientos sociales puede ser la resistencia pacífica, como dice Boaventura; o en su caso la organización y la movilización como dicen activistas y líderes sociales. ¿Es la participación de la ciudadanía en multitudes, la verdadera alternativa al cambio social? ¿Cómo lograr esa participación? Con todo el análisis, tendríamos que reconocer primero la complejidad de definir los términos de pluralidad, participación, violencia y no-violencia, pues son en sí mismos conceptos polisémicos. El debate sobre la resistencia civil pacífica es otro tema, que deberíamos introducir en nuestras convicciones, asumiendo y entendiendo sus contradicciones e impulsándola como alternativa efectiva a la violencia institucional (Tamayo, 2007).

Sin embargo, ninguna de estas cuestiones es fácil de responder. Su dificultad se evidencia en la situación de un movimiento que pierde centralidad, ante la pérdida de expectativas de convertirse en la universalidad de intereses particulares de ciudadanos y grupos, para seguir la idea de Laclau (2003) y Chantal Mouffe (1999). ¿Cómo construir un movimiento que se abra a la posibilidad de incidir en el poder desde los de abajo? No siempre se alcanza algo así. La respuesta debe tomar en cuenta reflexiones muy honestas, pensando en el movimiento por un lado, ponderando las estrategias del Estado por otro, y finalmente, reconociendo mucho más la racionalidad de las audiencias, de esa ciudadanía expectante que puede moverse y alinearse hacia uno u otro lado con mucha facilidad

BIBLIOGRAFÍA

- Aguayo, Sergio (2014). *Remolino. El México de la sociedad organizada, los poderes fácticos y Enrique Peña Nieto*. México: Editorial Ink
- Bachman Christian y Le Guennec Nicole (2002). *Violences urbaines*. Paris: Hachette Littératures.
- Bergalli, Roberto (2009). “Presentación”. En Ruggiero Vincenzo. *La violencia política. Un análisis criminológico*. Barcelona: Anthropos y universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. PP. VII-XIV.
- Camou, Antonio (2001) (comp). *Los desafíos de la gobernabilidad*. México: FLACSO, IIS-UNAM y Fondo de Cultura Económica.
- Crettiez, Xavier y Mucchielli, Laurent (2010). *Les violences politiques en Europe*. Collection Recherches. La Découverte.
- D’Odorico, José C. (2011). “La Guerra Civil difiere de la Subversiva”, *Air & Space Power, Journal en Español* 23 (3), pp. 59-72.
- Fazio, Carlos (2013). *Terrorismo mediático. La construcción social del miedo en México*. México: Debate.

- Fillieule, Olivier (2013) "Demobilization", *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* [en línea].
- González Villarreal, Roberto (2015). *Ayotzinapa. La rabia y la esperanza*. México: editorial Terracota.
- González Villarreal, Roberto (2012). *Historia de la desaparición*. México: Editorial Terracota.
- Goodwin Jeff, Jasper James M. and Francesca Polleta (2007). "Emotional Dimensions of Social Movements" en David A. Snow, Sarah A. Soule & Hanspeter Kriese (editors). *The Blackwell companion to Social Movements*. Malden, MA: Blackwell Publishing. Pp.413-432
- Hernández, Anabel (2010 [2014]). *Los señores del narco*. México: DEBOLSILLO, Penguin Random House Grupo Editorial.
- Hunt, Scott, Benford, Robert y David Snow (2006). "Marcos de Acción Colectiva y campos de identidad en la construcción social de los movimientos". En Aquiles Chihu Amparán (comp.). *El análisis de los marcos en la sociología de los movimientos sociales*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Jasper, James (2008) [2003]. "The emotions of protest". En Goodwin Jeff, and Jasper, James M. (Eds.) (2003). *The social movements reader. Cases and Concepts*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Laclau, Ernesto (2003 [2000]). "Identidad y Hegemonía: el rol de la universalidad en la construcción de lógicas políticas". En Butler Judith, Laclau Ernesto, Zizek Slavoj (2004 [2000]). *Contingencia, Hegemonía, Universalidad. Diálogos Contemporáneos en la Izquierda*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pp. 49-94.
- Meyer, Lorenzo (2013). *Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México*. México: Debate
- Mouffe, Chantal (1999). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: paidós.
- Olivier-Télez, Guadalupe, Tamayo-Flores-Alatorre, Sergio et Voegtli Michael (2013) «La démobilisation étudiante au Mexique: le double visage de la répression (juillet-décembre 1968)», *European Journal of Turkish Studies* [En línea], 17 | 2013, mis en ligne le 05 mars 2014, Consulté le 13 mars 2014. URL: <http://ejts.revues.org/4819>

- Olivier, Guadalupe y Tamayo, Sergio (2015). “Tensiones políticas en el proceso de movilización-desmovilización. El movimiento #YoSoy132”. En *Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. Nueva Época, Año 36 Número 79, julio-diciembre de 2015.
- Ruggiero, Vincenzo (2009). *La violencia política. Un análisis criminológico*. Barcelona: Anthropos y universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.
- Salazar, Luis (2001) (coord). *México 2000, alternancia y transición a la democracia*. México: Ediciones Cal y Arena.
- Tamayo, Sergio (1999). *Los veinte octubres mexicanos. Ciudadanías e identidades colectivas*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.
- Tamayo, Sergio (2007). “La no-violencia en los movimientos sociales ¿Qué vínculo puede haber entre Gandhi, Martin Luther King Jr. y AMLO?”, en *El Cotidiano* 141, enero 2007, pp. 98-109; ISSN: 0186-1840
- Tilly, Ch. (2006). *Regimes and Repertoires*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Tilly, Ch. (2008). *Contentious Performances*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Touraine, Alain (2013). *Después de la crisis*. México: FCE.

Citas hemerográficas

- Adolfo, Gilly (24 de noviembre 2014). “Dos meses después: ¡Vivos los queremos! En La Jornada. México.
- Boaventura de Sousa, Santos (16 de noviembre 2014). “Carta a las y los jóvenes de México”. en La Jornada. México.